

## ¿Cómo terminará todo esto? (III)

**Author :** Lenin Brea

Por: Lenin Brea

[En la última entrega de lo que se ha transformado en una serie](#), decía que la coyuntura venezolana podía definirse como una carrera contra el tiempo en la que los corredores debían cumplir ciertos objetivos antes de que se les agotasen las fuerzas.

Ha pasado un trimestre desde aquella oportunidad, y a pesar de la intensidad de las situaciones vividas en ese lapso, podría afirmarse que los corredores hacen honor a Zenón y tratan de demostrar que, al menos en política, el movimiento no existe.

Los golpistas, por su parte, no han conseguido hacerse con el gobierno, pero tampoco han hecho avances políticos significativos, al menos en el plano público. Al día de hoy, no han logrado producir una ruptura ni del chavismo ni del ámbito militar, pero tampoco capitalizar el descontento general en función de la movilización de masas.

Con el fracaso de la operación "Ayuda Humanitaria", la imposibilidad de capitalizar el descontento por la crisis del sistema eléctrico nacional, y finalmente, con el tragicómico resultado de la Operación Libertad parte I, Guaidó no ha hecho otra cosa que perder credibilidad tanto ante el común como ante el militante de oposición.

Del otro lado, el gobierno electo, no ha podido más que alcanzar victorias pírricas en el plano político y aún más cuestionables en el económico. Si bien el madurismo ha logrado mantener la maquinaria chavista suficientemente cohesionada y operativa, conservando el apoyo de su base política y de su dirigencia en los momentos críticos, no puede evitar el incremento de su impopularidad, de su falta de credibilidad y de desconfianza pública, amén de las tensiones generadas por los descontentos internos, deserciones y traiciones.

Visto así, nuestros corredores no se han movido un ápice de su punto de partida. Entre tanto, sus frenéticos esfuerzos por alcanzar sus objetivos han horadado el suelo en el que se batan. El resultado del conflicto político no ha sido otro que el cuestionamiento de la unidad política y la soberanía nacional.

No solo se trata de resaltar que los bandos en disputa están, de hecho y sin derecho, empeñando el patrimonio público y la soberanía política a sus respectivos terceros interesados. Hay que mencionar los efectos destructivos que tienen en nuestra economía y forma de vida las medidas económicas que bando y bando blanden para sostenerse o tomar el poder.

Además, a la par que la disputa por la presidencia, pero de forma soterrada, tienen lugar una

multitud de procesos de apropiación y distribución de la riqueza, tanto como modificaciones en la forma en que se produce. Dicha transformación se caracteriza porque su medio es la violencia, se hace valer en los hechos, cuando no puede hacerlo mediante un derecho que por lo general maneja a placer; sus fines son privados, y no respeta el color político, sino solo el poder del dinero.

Así, los Chinos pasan a tener propiedad sobre nuestra industria petrolera, la privatización de lo público y lo común avanza sin cuartel, la propiedad de Citgo está en vilo, las reservas internacionales y los bienes de la patria en el exterior son confiscados o manejados de formas nada transparentes; en el interior del país recrudece la lucha por la tierra y el asesinato de campesinos e indígenas, sobre todo en las zonas populares la violencia letal se ha hecho la base de la política de seguridad pública, mientras que a lo largo y ancho de territorio nacional los trabajadores son expoliados por el capital especulador y por el mismo Estado...

También hay que señalar que la unidad política nacional se ve cuestionada toda vez que la lucha se basa en ganar o mantener apoyos y lealtades a cualquier precio. En los momentos actuales a todo aquel que está en una posición clave, ventajosa, explotable, se le presenta la cuestión de determinar a quién conviene apoyar y a cambio de qué. Además, se castiga y perdona sin más criterio que el efecto que esto pueda tener en la situación política.

Es un hecho notable que ambos bandos persiguen una modificación sustantiva de la Constitución que dicen defender –lo que es evidente, para el Guaidismo en su plan de gobierno y para el Madurismo en el conjunto de decretos excepcionales y leyes o decretos constituyentes en los que fundamenta su política actual– y que para esto tienen como medio una violencia que califican como legítima, es decir, como fundada en la Constitución, las leyes, y la voluntad de la mayoría.

Otro hecho destacable es que ningún bando quiere elecciones ni le preocupa la democracia. De parte del Guaidismo se escuchan desde hace tiempo ya a prominentes intelectuales y voceros discurrir sobre la imposibilidad de realizar comicios en un plazo perentorio (cuando tomen el poder), mientras que para él Madurismo la negativa es, sencillamente, de principios.

Más allá, un aspecto en que comulgan los liderazgos en pugna es en su falta de transparencia con respecto al manejo de los recursos públicos y los asuntos comunes. No hay que olvidar que de un tiempo acá, Guaidó maneja, al menos nominalmente, parte de los recursos confiscados a Venezuela. Por otra parte, es un total misterio de dónde saca los recursos para sostener la asonada. De lado del gobierno el ocultamiento de la cosa pública es ya una política implementada hace tiempo junto al estado de excepción económico. Se diría que los liderazgos en juego no se relacionan con el pueblo, en tanto que sujeto de la soberanía y protagonista de la democracia, sino que están exclusivamente preocupados por el manejo de poblaciones que pueden darle favorables o adversas o riesgosas.

Por último, destacaremos que en cuanto a las medidas concretas puestas sobre la mesa, en particular para las clases trabajadoras, solo hay diferencia de matices y de postores. El consenso

se da en torno a la necesidad de flexibilizar la política laboral y crear condiciones para que el capital pueda sacar provecho a sus anchas.

La pregunta que titula esta serie no interroga tanto por el resultado de la lucha por la presidencia como por las consecuencias desastrosas de tal confrontación. Lo que hace pertinente recordar que, aunque de momento parezca distante, aún subsiste la amenaza de una guerra civil y de otros escenarios violentos en los que seguramente no dejarán de tener participación los terceros interesados. Esto sin olvidar que la confrontación actual ya ha dejado una cifra importante de muertes y heridos, sin hablar de las llamadas pérdidas materiales.

Señalar las consecuencias y causas de la disputa actual, tanto a nivel macro como micro, no tiene por objeto hacer llamamientos a la paz, si por paz se entiende la desaparición del conflicto, el meterse por el culo el descontento, o lo que sería lo mismo, la victoria sin condiciones de alguno de los liderazgos en pugna, la cual no solo tendría lugar sobre el enemigo sino también a los interno de cada bando.

Pero es tan grave la situación que el primer problema que plantea es el de cómo tramitar el conflicto por medios no violentos. Para tal fin no hay otro camino que algún tipo de elección. Las ventajas de un medio tal son innumerables, sobre todo para el pueblo.

Unas elecciones, (referéndum revocatorio, consultivo, elecciones generales, de los dos poderes nacionales), permitirían al pueblo decidir el conflicto por la presidencia de forma protagónica, no violenta y económica.

Encauzar el conflicto por la presidencia por la vía electoral supone el aumento de la movilización política y en una situación como la presente es de esperar que dicha movilización alcance grados de organización importantes y la definición de agendas que trasciendan tanto el hecho electoral, como los cálculos de los liderazgos. Además, una situación electoral es o puede ser favorable para el debate y la lucha política interna, incluso para una fragmentación de los polos entre los cuales se distribuye el conflicto político.

Definir el conflicto por la presidencia es crucial porque es una condición necesaria para la “estabilización” de la economía. Hacerlo de forma no violenta es imprescindible para que haya una economía que “estabilizar”. Hay que tener en cuenta que solo un capitalismo especulativo se arriesga a invertir en una situación de preguerra o de guerra de baja intensidad. Mientras la situación actual se prolongue e incluso si Guaidó tomase el poder por la fuerza, amen de una situación de conflagración abierta, la economía nacional seguirá siendo un campo abierto a la especulación y la [acumulación por desposesión](#).

Claro que la realización de unas elecciones requiere de condiciones mínimas. Tendrían que participar todos los factores políticos. Habría que establecer garantías durante el proceso, pero también para los perdedores. A su vez habría que establecer un arbitro creíble para todo el

mundo. Sería ideal que se levantarán las sanciones contra el país.

Al menos dos obstáculos se oponen a un proceso electoral. De una parte, los terceros interesados no están tanto con la patria como para arriesgarse a que su pueblo decida qué carajo es lo que quiere hacer. Hay en esto menos incuidad que el peso de sus interés políticos-pecuniarios. El Madurismo se haya presionado no solo por Chinos y Rusos, sino por los tenedores de bonos del Estado, Pdvsa y acreedores en general. Guaidó, por su parte, sufre la impotencia de todo aquel que lucha con medios ajenos, a saber que no tiene ninguna autonomia ni capacidad de decisión.

Por otra parte, ninguno de los liderazgos en choque, con todo y lo sucedido, encuentran aun suficientes motivos para dirimir el conflicto de otra forma que no sea la violenta. De hecho, a veces da la impresión de que la situación irresoluta en la que nos encontramos no encuentra ninguna salida, porque en el fondo es una fuente infinita de negocios de todo tipo y color, pero que siempre son a costa del patrimonio privado de los trabajadores, del patrimonio público y de aquello que es común.

Quizás no este demás señalar que un proceso electoral no es una solución mágica que resolverá todo. Sin embargo puede contribuir de forma decisiva al porvenir: si la guerra es la continuación de la política por otros medios, se trata de mantenernos del lado de los medios propiamente políticos y en espacial de aquellos menos violentos.

El segundo problema está vinculado a cómo poner en la agenda política nacional las cuestiones esenciales para nosotros, trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo se distribuirán las cargas derivadas de la violencia y de las medidas a tomar para salvar la situación? ¿En qué consisten dichas medidas y de nuevo, cómo serán distribuidas los costos y beneficios? ¿Cuál es el estado del patrimonio nacional y cuales deben ser la formas de apropiación distribución y producción de la riqueza que regirán en adelante de cara al bien común?